

D. No. 4367/1951/1a. 40

México, Distrito Federal.- ACUERDO de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día veintiséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno.

Vo. Bo. *McLando*

VISTO el juicio de amparo directo promovido por Ana María Guerra de Domínguez contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Juez y de los Actuarios del Juzgado Segundo de lo Civil de esta capital, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales; y

RESULTANDO

PRIMERO.- Por escrito presentado el quince de mayo del año actual, por conducto de la Sala responsable, Ana María Guerra de Domínguez interpuso demanda de amparo contra la sentencia pronunciada por dicha autoridad, el día siete del mismo mes, en el toca formado con motivo del juicio seguido por Francisco Javier Islas en contra de la quejosa, y contra la ejecución de esa sentencia, por parte de las demás autoridades que señala como responsables.

SEGUNDO.- Ante el Juez Segundo de lo Civil de esta capital y por escrito de catorce de julio de mil novecientos cincuenta, Francisco Javier Islas demandó de Ana María Guerra de Domínguez, en la vía sumaria, el pago de veintinueve mil pesos por concepto de daños que han sido causados al inmueble de su propiedad, marcado con el número noventa y siete de las calles de Amalia de la Colonia Guadalupe Tepeyac, más los daños que se sigan causando y los gastos y costas del juicio. Expresó como fundamento de su demanda, que según lo acreditaba con el testimonio anexo a la misma, tiene el carácter de propietario-

del lote de terreno número trece de la manzana quince del fraccionamiento Guadalupe Tepeyac, sobre el cual construyó su casa mercada con el número noventa y siete de las calles de Amalia; que la demandada es propietaria de las casas números veintidós y veinticuatro de la Avenida Noé de la misma Colonia y que colindan con la del actor; que la casa de éste fue construida primero y no presentaba daño alguno, pero al construirse las casas propiedad de la demandada, fueron apareciendo unas cuarteaduras de las cuales dió fe el Notario Rafael Capetillo, acompañando ^{ese} también/testimonio a su demanda; que esos daños habían aparecido aproximadamente un año antes de la fecha de su demanda y que según estudios hechos, no ha terminado de efectuarse el asentamiento de la construcción de la demandada, por lo que continuará causando daños, pero que hasta la fecha de su demanda el costo de la reparación importaría la cantidad de veinte mil pesos. En su contestación, la demandada manifestó no constarle que el actor fuese propietario de la casa número noventa y siete de las calles de Amalia, aunque sí le consta que habita en ella; que es propietaria de la casa número veintidós de las calles de Noé y que ambas fincas son colindantes, así como que primero fue construida la del actor y después la de la demandada; que ignora los daños existentes en la casa del actor, pues nunca la puso en conocimiento de ellos, y negó que las citadas cuarteaduras hubiesen sido causadas por el asentamiento de su propiedad. En la réplica el actor insistió en sus afirmaciones y la demandada no formuló dúplica. Seguido el juicio por sus trámites, el Juez de lo Civil pronunció sentencia el veintitrés de noviembre de mil novecientos cincuenta, declarando improcedente el juicio sumario de referencia, por lo que absolvió a la demandada y condenó al actor al pago de las costas. Francisco-

41



Javier Islas interpuso apelación y la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, por resolución de siete de mayo del presente año, revocó la sentencia apelada, declarando probada la acción, por lo que condenó a la demandada al pago de diecinueve mil ciento sesenta y cuatro pesos, cincuenta y ocho centavos, absolviéndola del pago de los daños posteriores a la presentación de la demanda y no hizo especial condenación en costas. Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente amparo.

TERCERO.- El Agente del Ministerio Público Federal se abstuvo de intervenir en el presente asunto, porque, a su juicio, los actos reclamados carecen de interés público.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Ana María Guerra de Domínguez solicitó oportunamente copia certificada de la sentencia que reclama, la cual fue remitida por la autoridad responsable, junto con la demanda original de amparo, al rendir su informe justificado, con lo cual se comprobó el acto reclamado.

SEGUNDO.- La quejosa alega que se han violado en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, por los siguientes conceptos:

1o.- Por inexacta aplicación de los artículos 798 del Código Civil y 379 y 381 del Código de Procedimientos Civiles, pues la autoridad responsable apoya su resolución en pruebas presuncionales, como es la de que siendo el actor dueño del lote de terreno, con ello probó presuncionalmente la propiedad de la casa construida sobre el mismo y su derecho para demandar los daños sufridos por dicha finca; olvidándose que, según jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, la propie-

sólo se acredita con el título respectivo y no con la prueba confesional, como sucede en el caso.

2o.- Por inexacta aplicación de los artículos 896 del Código Civil y 421 del Código de Procedimientos Civiles, ya que el primero de dichos preceptos rige exclusivamente los derechos de accesión, por lo que no puede derivarse de él, la presunción de que siendo el actor propietario del terreno, lo sea también de la casa construída en el mismo, como lo sostiene la responsable. En el caso, para probar la propiedad, el señor Islas debió rendir una información testimonial para acreditar que construyó de su peculio la casa en cuestión, protocolizar tal información y registrarla, conforme a la ley.

3o.- Por inexacta aplicación del artículo 896 del Código Civil y falta de aplicación de los artículos 3003 y 3018 del mismo ordenamiento, ya que la autoridad responsable pretende que la propiedad de la casa de que se trata, surta sus efectos contra tercero, sin haber título de propiedad debidamente registrado.

4o.- Por inexacta aplicación de los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles y falta de aplicación de los artículos 714, 715, 704 y 705 del propio ordenamiento, ya que la responsable, con apoyo en los citados artículos 278 y 279, admitió pruebas para mejor proveer y tuvo por demostrada la propiedad de la casa con datos presuncionales, derivados de algunos documentos, como son: recibo de pago del impuesto predial, licencia para construir la fachada de la finca, licencia de regularización, recibo por derechos de alineamiento, recibos por pago de construcción, recibo del pago de agua, etcétera, siendo que conforme a los demás preceptos citados, tratándose de juicios sumarios, no son admisibles medios de prueba en la alzada, y que de acuerdo con la jurisprudencia

42



cia de la Suprema Corte de Justicia, el comprobante del pago del impuesto predial no es demostrativo de los derechos de propiedad, y si bien no se interpuso reparación constitucional contra la admisión de tales pruebas, esos documentos carecen de eficacia para demostrar la propiedad.

50.- Por violación de los artículos 419, 346 y 350, fracción II del Código de Procedimientos Civiles, -- pues la responsable condena a la quejosa al pago de los daños sufridos por el inmueble en cuestión, fundándose en los dictámenes de dos peritos, sin fijarse que entre ambos existe enorme discrepancia, respecto a la base para calcular fuerza por unidad de superficie, así como que no acreditaron tener título debidamente inscrito en la Dirección General de Profesiones y que no practicaron unida la diligencia, según se desprende de las repreguntas que se les formularon. Por último, la responsable no estudió debidamente las pruebas que aceptó para mejor proveer, de las que se desprende que la casa del señor Islas fue construida en dos partes y que los daños fueron causados por la ampliación que se hizo a la misma y no por la finca de la quejosa.

TERCERO.- Son infundados los conceptos de violación que hace valer Ana María Guerra de Domínguez. En efecto, según aparece de la sentencia reclamada, para determinar que Francisco Javier Islas acreditó ser propietario de la casa noventa y siete de las calles de Amalia, la existencia de los daños ocurridos a la misma y la relación de causalidad entre ellos y las obras realizadas por la demandada, el Tribunal responsable se fundó, substancialmente, en que con el testimonio de la escritura pública, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, el actor acreditó plenamente que es dueño del te-

rreno número trece de la manzana quince del Fraccionamien-
to Guadalupe Tapeyac, y que por el mismo testimonio, la -
contestación a la demanda, la absolución de posiciones --
por ambas partes y por la inspección judicial, aparece --
acreditado que el señor Islas construyó su casa sobre el-
citado predio, y que el mismo colinda con la casa número-
veintidós de la Avenida Noé y con la construcción que se-
efectúa en el número veinticuatro de la misma Avenida, am-
bas propiedad de la demandada, así como que la casa del -
actor fue construida primero. De todo lo cual se sigue, -
que la responsable aplicó correctamente los artículos 798
y 896 del Código Civil, conforme a los cuales, la pose-
sión da al que la tiene, la presunción de propietario pa-
ra todos los efectos legales, y que todas las obras, siem-
bras y plantaciones, así como las mejoras y reparaciones-
ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el pro-
pietario y a su costa, mientras no se prueba lo contrario.
Por su parte el artículo 379 del Código de Procedimientos
Civiles expresa que la presunción es la consecuencia que-
la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averi-
guar la verdad de otro desconocido: la primera se llama -
legal y la segunda humana; por lo que, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 798 del Código Civil, debe --
concluirse lógicamente que en el caso se trata de una pre-
sunción legal, por derivarse de la ley, y, por lo mismo, -
en el caso resulta de exacta aplicación lo ordenado en el
artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles, confor-
ma el cual, el que tiene a su favor una presunción legal,
sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la -
presunción, lo que ocurrió en el caso. Tanto más, cuanto-
que el mismo Tribunal responsable expresa que de autos --
consta que "la parte demandada no aportó prueba alguna en
caminada a desvirtuar las anteriores presunciones, por lo



cual, éstas, de conformidad con el artículo 421 del Código de Procedimientos Civiles, hacen prueba plena". Y siendo esto así, tampoco es de tenerse en cuenta lo alegado por la quejosa, en el sentido de que el actor debió promover una información ad-perpetuam para acreditar que él -- construyó la finca cuestionada, protocolizar dicha información e inscribirla, para que pudiera surtir efectos -- frente a tercero, ya que, según expresa la autoridad responsable, la escritura de compraventa por la que el señor Islas adquirió el dominio sobre el terreno en que se encuentra la repetida casa, fue debidamente inscrita en el Registro Público en el año de mil novecientos cuarenta y cuatro, por lo que desde esa fecha comenzó a surtir efectos respecto de terceros, tanto en lo que al terreno se refiere, como en cuanto a la propiedad de la casa construida en el mismo, en virtud de la presunción establecida en el artículo 896 del Código Civil, salvo prueba en contrario, que en el caso no se aportó. Respecto al criterio sostenido por la quejosa, en el sentido de que de acuerdo con los artículos 714 y 715 del Código de Procedimientos Civiles, tratándose de juicios sumarios, no son admisibles medios de prueba en la alzada, debe decirse -- que la simple lectura de los artículos 278 y 279 del propio ordenamiento, demuestra que la facultad discrecional que "en todo tiempo" se concede al juzgador, "sea cual fuere la naturaleza del negocio", para averiguar la verdad -- sobre los puntos controvertidos, no tiene más limitaciones que las referentes a que las pruebas que se decreten, no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral, y a que la práctica de las diligencias correspondientes se haga de manera que no se lesione el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad; sin -- que en la especie se hubiese alegado, y menos demostrado,

que el Tribunal responsable hubiese dejado de observar las reglas contenidas en dichos preceptos. Por último, la autoridad responsable tuvo por acreditada la existencia de los daños causados en la finca del actor, con el testimonio -- notarial y la inspección judicial ofrecidos por éste, y en cuanto a que dichos daños ocurrieron como consecuencia de las construcciones efectuadas por la demandada, la propia responsable tuvo por demostrada esa relación de causalidad, así como el monto de dichos daños, por medio de la prueba pericial, robustecida con la confesión de la demandada y -- con el testimonio del doctor Porfirio Escudero Gómez y Paz Hernández de Escudero; sin que pueda tomarse en cuenta lo alegado por la quejosa, en el sentido de que los peritos no practicaron unidos la diligencia y de que existe enorme discrepancia entre sus dictámenes, así como que los daños sufridos por la casa del actor fueron causados por la ampliación que éste hizo a su propia finca, por no existir -- en el expediente formado con motivo del presente amparo, -- constancia alguna que acredite tales aseveraciones. En consecuencia, siendo infundados los conceptos de violación -- que hace valer Ana María Guerra de Domínguez, debe negársele el amparo que solicita.

Por lo expuesto y con fundamento además en los -- artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II, III y V de la Constitución General; 45, 158, y 190 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y 26, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la -- Federación, se resuelve:

UNICO.-- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana María Guerra de Domínguez contra la sentencia del día siete de mayo del presente año, pronunciada por -- la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, en el toca formado con mo-



tivo del juicio sumario seguido por Francisco Javier Islas en contra de la quejosa, sobre el pago de daños causados al inmueble de su propiedad, ni contra la ejecución de dicha sentencia, por parte del Juez y Actuarios del Juzgado Segundo de lo Civil de esta Capital.

Notifíquese; remítase testimonio de esta ejecutoria a la autoridad designada como responsable, para los efectos a que haya lugar, y, oportunamente, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Agustín Mercado Alarcón, Vicente Santos Guajardo, Hilario Medina y Presidente de la Sala, Carlos I. Meléndez, ponente en este negocio. El señor Ministro Roque Estrada no intervino en la resolución de este negocio, por las razones que constan en el acta del día. Firman los ciudadanos Presidente y Ministros que integraron la Sala, con el Secretario que da fe. E. L.- ese.- Vale.

PRESIDENTE

C. I. Meléndez
LIC. CARLOS I. MELENDEZ.

MINISTROS

Agustín Mercado Alarcón
LIC. AGUSTIN MERCADO ALARCON. *Vicente Santos Guajardo*
LIC. VICENTE SANTOS GUAJARDO.

Hilario Medina
LIC. HILARIO MEDINA.

SECRETARIO

Abelardo Cardenas Mac-Gregor
LIC. ABELARDO CARDENAS MAC-GREGOR.

10

24 597 10

por lista de 1ª mesa fecha de
... a los interesados
... Federal

W. J. Kennedy